

Semestral marzo-septiembre 2014.

Las relaciones con Estados Unidos: signos de continuidad

Abogada Luciana Felli

Dr. Leandro Sanchez

La relación bilateral entre ambos países continúa mostrando signos de continuidad. En términos económicos las consecuencias de la recesión mundial, el sistemático reclamo de los bonistas acreedores y la inversión extranjera directa, junto con la apertura al FMI para que sus auditores verifiquen si son ciertas las cifras oficiales de la economía concentraron lo más importante de la relación bilateral.

La continuidad sin cambios se refleja de manera inmediata a comienzos de este semestre. Prueba de ello, se vio reflejada en los diversos comentarios proferidos por uno de los principales referentes del Partido Republicano, el senador John McCain, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien cuestionó la administración de la presidente Cristina Fernández de Kirchner. El ex contendiente de Obama, se suma al juego del bloqueo a través del voto de varios embajadores, entre los que se encuentra el elegido de la Casa Blanca para la embajada norteamericana en la Argentina, Noah Mamet. En ese sentido, resalta que en varias ocasiones nombrar embajadores políticos ha resultado bien, pero para el caso de la Argentina, no lo es, en virtud de no poder identificar si ese país es o no un aliado de los Estados Unidos. Luego de requerirle opinión a Mamet en el parlamento, en relación al deterioro institucional de la Argentina, continuaron las expresiones críticas hacia el país criollo, desde su retroceso democrático y su alineamiento con Cuba y Venezuela, hasta la inquietante y creciente vinculación entre la Argentina e Irán, con lo cual el senador republicano presenta dudas en función de considerar al país del sur como real socio para los intereses norteamericanos.

Por su parte, y en el juego legislativo, los demócratas apoyaron rotundamente y bregaron por la confirmación de Mamet como embajador de la Argentina, siendo a su vez la saliente de ese cargo, Vilma Martínez, quien defendió las cualidades del candidato para desempeñarse en el cargo propuesto.

Por otra parte, luego del lamentable acontecimiento por el cual el canciller Timerman retuviera en Ezeiza un avión militar estadounidense, hace tres años, el que arribaba para instruir a policías federales en la lucha contra las drogas, la Argentina retomó los contactos de colaboración estratégica. En este caso, lo implementa de manera indirecta a través de los gobernadores de las provincias, para enfrentar ese flagelo que se acrecienta en sus distritos. En estos últimos meses, se celebraron varios acuerdos para recibir apoyo de oficinas como la DEA, FBI y otras agencias vinculadas al tema del Departamento de Estado. Por el momento, el acercamiento con Washington lo hicieron Buenos Aires, Chubut, Salta, Mendoza y Santa Fe. Dicho asesoramiento fue confirmado por Kevin Sullivan, encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Este hecho se traduce por diversas vías: el intercambio de información sensible, los cursos de apoyo y

entrenamiento a fuerzas de seguridad en Estados Unidos y en algunos casos el aporte de equipamiento necesario para enfrentar bandas traficantes de drogas.

En consonancia con este tema, se dio a conocer este año un nuevo informe del Departamento de Estado sobre la situación del narcotráfico en el mundo. En relación a la Argentina, dicho documento reveló que el aumento del consumo de drogas estaría relacionado con el incremento de crímenes violentos. Y al hacer una evaluación del combate contra el narcotráfico, pone sobre relieve la necesidad de una mayor coordinación de tareas entre las fuerzas de seguridad nacionales y las provinciales.

El informe señala que si bien la Argentina trabajó para mejorar sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico en 2013, la implementación de reformas operacionales fue de manera gradual. Asimismo, resalta que se reanudaron las tareas de cooperación entre ambos gobiernos por la lucha contra las drogas. A su vez, el informe señala falencias judiciales y de corrupción que continúan complicando la lucha contra ese flagelo. En este sentido, menciona la necesidad de potenciar las tareas de detección del tráfico de drogas en la frontera norte por medio de equipos de radares. Y llama a las autoridades argentinas a impulsar la eficiencia de la Justicia en las investigaciones.

Luego de conocido el documento, a contrapunto de lo informado, el canciller argentino, salió a responder con duras críticas, señalando entre otras cuestiones que Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo y el que más dinero negro produce por ese consumo, desconociendo a su vez que ese país tenga autoridad para decidir quién se comporta de qué manera, como si emitiese boletines de calificaciones sobre diversos temas. Esto refleja una vez más, los signos de continuidad en los vaivenes de la relación entre ambos países.

A principios de este semestre, se generó un principio de acercamiento, por decirlo de alguna manera. El canciller argentino, Héctor Timerman, se reunió en Nueva York con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como así también con el con el Presidente del Consejo de Seguridad de la organización, el Canciller de Luxemburgo, Jean Asselborn; y la Representante Permanente de los Estados Unidos y miembro del gabinete del Presidente Barack Obama, Samantha Power. En las tres reuniones, Timerman reafirmó la necesidad de garantizar el respeto irrestricto a la paz, los derechos humanos y la integridad territorial, así como la protección de las minorías étnicas y religiosas, tal como lo estipula la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, resaltó la posición argentina contra la injerencia externa a través de medios militares, económicos o políticos en los asuntos internos de países soberanos.

En otro gesto de acercamiento, el secretario de Estado norteamericano para Brasil y el Cono Sur, William Ostick, compartió un almuerzo en la residencia de la diplomacia norteamericana en la Argentina, junto al encargado de negocios de la embajada de ese país, Kevin Sullivan, con representantes de la oposición y del oficialismo y ex embajadores argentinos. Allí, resaltó el enviado de Obama, la necesidad de que ambos países confluyan en una agenda positiva, y señaló que Washington apoyaría al gobierno argentino en los desafíos que tiene en el plano internacional, destacándolo como un socio estratégico para los EEUU. En ese sentido, Ostick manifestó que seguirán el mismo camino de Francia en el apoyo hacia la Argentina, en aras de negociar la deuda que tiene en el Club de París. Además, de reunirse con autoridades argentinas, legisladores y

empresarios, el secretario de Estado norteamericano, mantuvo un encuentro con el secretario de Comercio, Augusto Costa, y con la subsecretaria de Relaciones Internacionales de la Cancillería, María Squeff.

En el mes de mayo, el Departamento de Estado norteamericano, difundió un nuevo informe sobre Terrorismo, y demostró su preocupación por la situación en la Triple Frontera argentina. El documento hace hincapié en los desafíos en materia de vigilancia que debe afrontar la Argentina. La administración de Obama, considera la Triple Frontera, como un nexo regional de armas, narcóticos y tráfico de personas, falsificación, contrabando y lavado de dinero, todas fuentes potenciales de financiamiento de organizaciones terroristas. Resalta por otra parte, la capacidad de la Argentina para enfrentar el terrorismo en el ámbito federal y recuerda el intercambio de información entre ambos países. La cancillería estadounidense, destaca la promulgación de la ley antiterrorista parte del gobierno de Cristina Kirchner, pues la consideran como suplemento al código penal para el enjuiciamiento de casos de terrorismo. A su vez, el informe señala el fracaso del memorando que la Casa Rosada firmó con el gobierno de Irán para avanzar en la investigación por el atentado a la AMIA.

La publicación del informe, coincidió con una crítica sobre el incremento del consumo doméstico de drogas en el país, por parte de la diplomática del gobierno de Obama para América latina: Roberta Jacobson, quien se refirió en ese sentido, en el marco de una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado, frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Manhattan.

En una muestra al rechazo hacia el informe propiciado por el Departamento de Estado, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, en relación al supuesto incremento del narcotráfico en la Triple Frontera, señaló que Washington importa droga y exporta muertes. Pero a pesar de las reiteradas críticas desde la Argentina, se cerraron acuerdos con la DEA, que contemplan tareas de capacitación del personal especializado en narcocriminología e intercambio de información sensible para llevar a buen puerto los operativos antidrogas. De este modo, la relación con el principal organismo antinarcóticos estadounidense, retoma la dinámica perdida.

Durante el mes de mayo continuaron las tensiones en el senado norteamericano, respecto a la designación de varios embajadores designados por Obama. Entre ellos continuaba bloqueada la designación de Mamet para la representación de EEUU en la Argentina, cargo que dejó vacante la ex embajadora Vilma Martínez. El eje de la disputa se centra en el marco de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Pareciera que lo generó demasiado ruido entre los senadores republicanos, fue que el candidato Mamet, calificara de país aliado a la Argentina.

En el mes de junio, finalmente la Corte Suprema de Estados Unidos, rechazó el pedido de la Argentina para que el tribunal revise los fallos adversos de primera y segunda instancia en el juicio contra el país iniciado por los “fondos buitres”. Así pues, ratificó el fallo del juez Griesa que le ordenó al gobierno argentino pagarles a los fondos Aurelius, NML y un grupo de 13 ahorristas US\$ 1330 millones más intereses en efectivo, y además, habilitó a dichos fondos a acceder a los registros bancarios para localizar activos financieros del país y avanzar con los embargos. Al mismo tiempo, el máximo tribunal, rechazó el pedido argentino de la llamada cláusula “pari passu”, cerrando de esa manera la vía judicial para concluir el litigio con dichos fondos, cuya deuda deviene impaga desde

finales del año 2001, y que a su vez los holdouts negaron sumarse a las reestructuraciones de la deuda argentina propiciadas en los años 2005 y 2010.

Por otra parte, desde el gobierno argentino se delineó la estrategia judicial de presentarse ante la Corte Internacional de La Haya, lo cual generó el rechazo desde el Departamento de Estado, considerando que no es el ámbito adecuado para resolver el conflicto

Mas allá de la tensión desatada entre la Argentina y EEUU, por el conflicto judicial con los “fondos buitres”, la agenda entre ambos países en materia de colaboración para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se mantuvo inalterable. Prueba de ello, es que un equipo del FBI, se presentaría en el mes de septiembre en Buenos Aires, para realizar tareas de entrenamiento a las fuerza de seguridad.

Dejando de lado los fuegos de artificio verbales desplegado por algunos funcionarios en este semestre, y corriendo de plano la cuestión de la deuda argentina con los holdouts, se vislumbró una incipiente sintonía entre ambas administraciones. Prueba de ello se refleja en el rol que jugó Estados Unidos en el acuerdo de la Argentina con el Club de París. En este ámbito, Kevin Sullivan, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, resaltó los avances logrados para resolver las disputas económicas con el Ciadi y el Club de París, en pos de mejorar las inversiones argentinas.

También debemos mencionar los convenios de cooperación celebrados con la DEA y el FBI, en pos de la lucha contra el narcotráfico. Además de la visita a la Argentina del viceministro de Energía de los EEUU, Daniel Poneman, lo cual refleja el fuerte interés norteamericano de invertir en Vaca Muerta.

Uno de los temas más importantes de la relación entre ambos países es el referido a las decisiones de la Corte de los Estados Unidos en torno al caso de los holdouts.

Cabe recordar que el Gobierno había apelado ante el máximo tribunal la decisión judicial que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York emitió el 26 de octubre de 2012, un fallo que ese mismo tribunal reafirmó, luego, en su decisión emitida el 23 de agosto de 2013.

En este contexto, el semestre comenzó con una decisión que implicó un revés para las expectativas del Gobierno, ya que la Corte Suprema de los Estados Unidos no tomó el caso de los llamados "fondos buitre" contra la Argentina, a la espera de otra parte del expediente que se tramita en la Cámara de Apelaciones de Nueva York. El país tendría que esperar a que se defina la situación de parte del expediente que se encuentra en la Corte de Apelaciones de Nueva York. Una vez conocido el veredicto, tendría 90 días (ampliables a otros 60) para presentar otra apelación en la Corte.

Paralelamente, aunque la presidenta Cristina Kirchner dijo el 26 de agosto por cadena nacional que pondría en marcha esta nueva reapertura y que el 23 de septiembre pasado se promulgó la ley que suspendió la "ley cerrojo" (aplicada en los canjes de 2005 y 2010 para convocar a más acreedores), aún no hay una fecha concreta para el tercer canje de deuda para los bonistas en default.

Hacia mediados de noviembre la Cámara de Apelaciones de Nueva York le negó al Gobierno la chance de revisar en un plenario el fallo que condenó al país a pagar a los holdouts unos 1500 millones de dólares.

Desde Washington, a inicios de diciembre, el fiscal General del Estado, Donald Verrilli presentó un escrito pidiendo a la Suprema Corte de Justicia intervenir por los intentos de un fondo de inversión de obtener información sobre los activos de la Argentina fuera de Estados Unidos.

El fondo de inversión de riesgo NML Capital buscaba recuperar el valor total de los bonos argentinos en su cartera, un remanente de los títulos por 100.000 millones de dólares que Buenos Aires dejó de pagar en el 2002. El litigio de fondo se encaminaba a ser revisado por el máximo tribunal estadounidense, pero, el Fiscal General de Estados Unidos hizo una presentación por la que la cuestión debería acotarse a si NML puede ejecutar una orden contra el Bank of America y el Banco de la Nación Argentina para conseguir información sobre los activos no estadounidenses de la Argentina.

Siguiendo en esa senda alentadora para el gobierno, a principios de enero de 2014 el máximo tribunal norteamericano aceptó el pedido del Gobierno de analizar el expediente, en el que el fondo NML-Elliot había exigido a los bancos Nación y Bank of America que difundieran bienes del Estado y de los Kirchner. Esta decisión, no sienta precedente sobre el juicio más relevante, en el que se falló en contra de la Argentina por el *pari passu*, que obliga al país a pagarles a los "fondos buitres" y a 13 inversores minoristas, pero fue de suma importancia.

Un mes después la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos puso fecha para una audiencia que hace lugar a la presentación del fondo buitres NML Elliot, de Paul Singer, pero en la que, el estudio que representa al país, Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGSH), podrá exponer sobre la cuestión de fondo. La cita será el lunes 21 de abril, a las 10, la Argentina podrá exponer sus argumentos y tratar de convencer al máximo tribunal de ese país de que tome el caso.

El mejor escenario para el país era que el máximo tribunal estadounidense considerara al caso argentino recién en la agenda de 2014. Es lo que podría suceder después de la audiencia de abril. Además, no se descarta que, antes de pronunciarse, la Corte pida su opinión al gobierno de Barack Obama (que se pronunció a favor del caso argentino otras veces).

Paralelamente, el lunes 17 de febrero, fue la última presentación del país frente a la Corte en la causa central: el tribunal deberá decidir si acepta rever los fallos de primera y segunda instancia que obligan al país a la cancelación de 1300 millones de dólares a holdouts en un solo pago y en efectivo.

Finalmente, el semestre culmina con un documento en el que los Estados Unidos, a través de su procurador general, expresa su opinión favorable a la Argentina en uno de los dos casos abiertos y que sometió a la Corte Suprema.

Si bien el *amicus curiae* se refiere a una causa secundaria del litigio, llamada *discovery*, la mención a la "inmunidad soberana" podría ser un punto interesante para la causa de fondo, en la que la Argentina apeló el fallo que la obliga a pagar deuda atrasada a los demandantes. En su presentación ante la Corte Suprema, el procurador general, argumentó que Washington tiene "un interés sustancial en la correcta interpretación y aplicación" de la ley de inmunidad soberana extranjera".

Otro tema central en la relación entre ambos países es la posición Estados Unidos en la toma de créditos internacionales del país.

En octubre el Banco Mundial acordó con el Gobierno tratar en su directorio un plan de créditos para el país que contemplaba un desembolso total de US\$ 3000 millones, destinados a financiar programas de salud, educación y desarrollo rural. Se trataría de programas que implican 1000 millones de dólares por año, para un período de tres años; en este caso, entre 2014 y 2016.

El anuncio se conoció en medio de una jornada llena de rumores sobre la posibilidad de que la Argentina habría aceptado pagar los fallos que ya dictó en su contra el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial. Estas versiones impulsaron a los bonos soberanos en dólares, que cerraron la jornada con subas de hasta 7,35%.

Cabe recordar que hace años que la Argentina sufre en el Banco Mundial el bloqueo de países que se oponen a que se le otorgue financiamiento, como consecuencia de los fallos que no honra. Entre ellos figuran Estados Unidos, Alemania y Japón. La misma situación se vive en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero allí los préstamos no llegan a bloquearse porque la presión de quienes se oponen a votarlos queda diluida por el aval de países de la región.

Muestra de ello es que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó a fines de 2013, en una muy ajustada votación, un nuevo crédito para la Argentina, por 300 millones de dólares.

Este crédito del BID forma parte de un plan por 1200 millones de dólares para la Argentina en ese año, según los planes del banco regional, en el que Estados Unidos tiene el 30 por ciento de las acciones. Por su parte, América latina tiene el 53 por ciento, mientras que Europa, China y Japón se reparten el resto.

El anhelo argentino es que Estados Unidos y otros gobiernos comiencen a apoyar al país a partir del anuncio del acuerdo con un grupo de empresas a las que se les pagará su sentencia del Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. En este sentido, el Gobierno anunció que ya se cerró un acuerdo con cinco empresas que habían ganado casos arbitrales en el Ciadi y el Uncitral (el tribunal de Naciones Unidas). Se trata de National Grid, Continental, Vivendi, Azurix y CMS Gas. La resolución 598 del Ministerio de Economía, publicada el 18 de octubre en el Boletín Oficial, estableció el pago de 501 millones de dólares a estas cinco compañías extranjeras.

El Banco Mundial, pese a haber anunciado un programa de créditos para el país para los próximos tres años que se encontraba ya en su "fase final" y que se presentaría al directorio del organismo, quedó postergado hasta febrero o marzo.

La Argentina no tiene una Estrategia de Alianza con el País (CPS, por sus siglas en inglés) con el Banco Mundial desde julio del año pasado. El CPS es el programa integral de financiamiento que suele negociarse por un período de entre tres y cuatro años (que generalmente coincide con un período presidencial), y que sirve de marco luego para todos los créditos que el banco da en ese período.

Pero el nuevo CPS de la Argentina para el segundo mandato de Cristina Kirchner no había sido hasta ahora sometido a la votación del directorio del organismo, porque el país no contaba con los votos suficientes. Los directorios de países clave dentro del Banco Mundial, como Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y España, venían anticipando que votarían en contra de nuevos préstamos para el país,

en reclamo de las deudas que la Argentina tenía en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial; el conflicto todavía vigente con los holdouts, y la estatización de YPF.

El anuncio de octubre de que el Gobierno había llegado a un acuerdo por los juicios del Ciadi reabrió las negociaciones. Aunque el Banco Mundial estaría esperando ver no sólo cómo se desenvuelve este acuerdo, sino qué sucede con las estadísticas del país. Recién el 9 de diciembre el Fondo Monetario Internacional (FMI) trató en su directorio el nuevo índice de precios presentado por el Gobierno.

El gobierno de Barack Obama respaldó activamente las tratativas y mantiene una puerta abierta a la posibilidad de que la Argentina llegue a un acuerdo por la deuda de cerca de 10.000 millones de dólares que mantiene con el Club de París.

Si bien Washington no figura entre los principales acreedores de la Argentina en ese club de países acreedores, ese paso sería "indispensable" para modificar algunas de sus políticas hacia el país, entre ellas su oposición a avalar créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM).

A diferencia de lo que ocurre con otros temas de agenda económica entre Estados Unidos y la Argentina, que corresponden al Departamento del Tesoro, la deuda con el Club de París es competencia directa del Departamento de Estado. Ello refleja el matiz que puso Washington entre la deuda que existe con el Club de París y la que el país mantiene con bonistas que lo demandaron ante los tribunales. En el primero de los casos saludaron la "delineación" de un plan de pagos. En el segundo, en cambio, quedó claro que no se abre juicio sobre solución alguna. Es que, más allá de los argumentos jurídicos, en lo operativo la deuda con los bonistas representa una dificultad concreta para el gobierno norteamericano. Hay acreedores norteamericanos en el frente de los holdouts, que demandaron al país tras no canjear sus papeles. Pero también los hay entre los tenedores de bonos reestructurados, que sí aceptaron las ofertas de 2005 y 2010.

En ese sentido se pronunció Kevin Sullivan, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, calificó hacia fines de febrero como "decisiones muy positivas" del gobierno de Cristina Kirchner las negociaciones abiertas con Repsol y el Club de París para resolver la compensación por la estatización de YPF y la deuda en default que mantiene el país con ese grupo de acreedores. El diplomático afirmó que la posibilidad de avanzar y resolver con ambos conflictos permitiría "que quitemos de la agenda bilateral los temas más polémicos y más problemáticos para dejar más espacio a la colaboración que queremos hacer".

Por otra parte, el Secretario de Energía norteamericano insistió en que su país no avala las nacionalizaciones. El gobierno de Barack Obama renovó en España su rechazo a la "nacionalización" del paquete español de la petrolera YPF y su apoyo a los reclamos de Madrid por esa medida. Lo sugestivo, sin embargo, es que se trata del primer gesto de ese tipo que produce Washington desde que la norteamericana Chevron firmó un acuerdo con el gobierno de Cristina Kirchner para explotar Vaca Muerta, el yacimiento de donde, precisamente, fue desalojada la española Repsol.

A ello se le sumó las críticas de funcionarios del gobierno de Barack Obama manifestando su preocupación por la caída de reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y advirtiendo que la administración de Cristina Kirchner deberá tomar medidas de aplicación

simultánea. Esta intervención generó una dura réplica por parte del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

A esas diferencias se le deben sumar el reciente fallo adverso de la Corte Suprema norteamericana.

La Argentina perdió el 6 de marzo uno de los tres casos que, por deuda atrasada, sometió a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y quedó obligada a pagarle US\$ 185 millones a British Gas. Apenas conocida la decisión, a la que se llegó por un fallo de 7 jueces contra 2.

La mirada estaba puesta en dos particularidades del fallo. La primera, cuál sería la reacción argentina, si desconocerá o si acatará el fallo. La otra particularidad que se señaló en el fallo fue el hecho de que el veredicto incluyó una decisión de los magistrados de "ignorar" un documento del gobierno de Estados Unidos que desaconsejaba ese curso.